

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de de septiembre de dos mil veintitrés.

A los folios 27 y 28: téngase presente.

Al folio 29: a sus antecedentes.

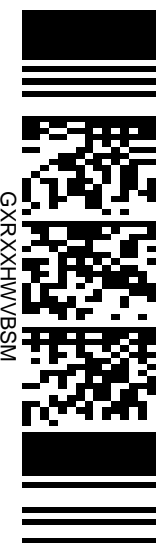
Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, quien en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la **Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)**, en virtud de la Resolución Exenta N° 11.964, de 26 de abril de 2022, que le aplicó una multa de 39.800 U.T.M. y; en contra de la Resolución Exenta N° 35.438, de 29 de agosto de 2022, del mismo origen, que rechazó su recurso de reposición en contra de la primera resolución referida, solicitando que se dejen sin efecto, con expresa condena en costas, declarando en consecuencia que dichos actos son ilegales y que se la absuelva del único cargo formulado o, en subsidio, que se rebaje significativamente el monto de la multa impuesta.

Expone a modo de contexto que la SEC en uso de sus potestades de fiscalización revisó la información de CGE del proceso de “Interrupciones 2018”, para el período enero a diciembre de 2020. En ese período, la autoridad detectó que supuestamente la reclamante sobrepasó el límite máximo del indicador SAIDI, formulándole 6 cargos, fundados en el incumplimiento del artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y los artículos 72-14 y 130 de la Ley del ramo, por incumplimientos en las comunas, en este caso, de Curicó, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, San Clemente, Yerbass Buenas, Vichunquén y Chanco.

Da cuenta que luego de presentados sus descargos, la Superintendencia, por medio de la primera resolución lo sancionó por las infracciones ya indicadas, calificándolas como gravísimas de conformidad con el artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410, aplicándole la multa indicada y, luego, rechazó su reposición, manteniendo íntegramente la sanción.

Argumenta que la SEC le impuso una sanción gravísima no determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal. En ese sentido, refiere, a nivel legal el procedimiento iniciado se sustenta en la potestad del artículo 15 inciso primero de la Ley N° 18.410. Por su parte, la sanción aplicada tiene como base legal la norma que regula la calidad del servicio de distribución, contenida en el artículo 130 de la LGSE, que se remite a reglamentos para establecer la conducta que se le exige, es decir, como empresa distribuidora, debe operar con



GXRXXHWVBSM

una calidad de servicio que corresponda a estándares normales con límites máximos de variación según lo que determinen los reglamentos.

En esos términos, cuestiona que los parámetros de la conducta son tan amplios e indeterminados en la ley -artículo 130 de la LGSE-, que no permiten a la empresa identificar cómo o cuándo deja de cumplir un estándar normal, bajo los límites máximos, previendo únicamente que se determinen en reglamentos, habiéndose especificado la definición en una simple norma técnica, dictada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), sin respetar el principio de tipicidad, vulnerando de esa norma el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Esgrime que, en contravención a esa garantía, la SEC le aplicó estándares contenidos en una norma técnica aprobada por una resolución de la CNE, exenta del trámite de toma de razón, que no cumple con la naturaleza jurídica de un reglamento como dispone el artículo 130 de la LGSE, en tanto la referida Norma Técnica es infra reglamentaria.

Conforme a esos argumentos, considera que el indicado artículo 130 de la LGSE es una ley penal -administrativa- en blanco, en tanto sólo establece un supuesto fáctico indeterminable desde el punto de vista de la conducta sancionable y no tiene verbo rector explícito, incumpliendo el principio de tipicidad.

Como otra razón de ilegalidad, arguye que se realizó una errada calificación de la infracción como gravísima, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 18.410, que califica como tal los actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente, hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.

En su caso, al 31 de diciembre de 2020 tenía 3.066.920 clientes, número que debe considerarse para calcular el porcentaje de usuarios afectados. No obstante, fue sancionado considerando solamente los clientes afectados en las comunas individualizadas en la resolución, y no el universo completo de usuarios abastecidos por CGE como exige el legislador, prescindiendo del texto expreso de la ley, distinguiendo donde el legislador no lo hace, efectuando interpretación extensiva.

En conformidad a dicha norma, estima que es ilegal la calificación de gravísima de la infracción, atendido que la totalidad de los clientes afectados no supera el 3,6% del total de los usuarios, y eso aún en el evento de estimarse que todos los clientes en dichas comunas fueron afectados -que no es el caso-,



escenario en el que jamás pudo alcanzarse el umbral de 5% del total de los clientes.

Adicionalmente, esgrime que existe infracción al principio *non bis in ídem*, pues la supuesta transgresión se utiliza para sancionar en diversas comunas y, luego, nuevamente para calificar la infracción como gravísima, infringiendo además el principio de proporcionalidad, por las razones que detalla.

Por último, en cuanto a los parámetros utilizados para establecer el monto de la multa, señala que esta se funda en las letras c) y d) del artículo 16 de la Ley N° 18.410, es decir, el beneficio económico obtenido de la infracción y la intencionalidad en la comisión de la infracción, afirmando que no ha obtenido beneficio alguno en la superación del límite SAIDI el año 2020, ha realizado inversiones y ha tenido problemas para ejecutarlas atendidos los contextos del año 2019 y 2020 y, no ha tenido la intención de incurrir en infracciones

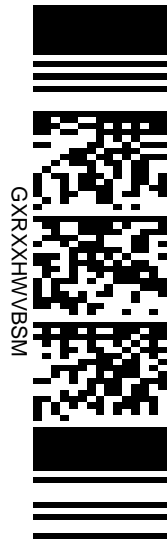
Segundo: Que, evacuando traslado por la reclamada **Superintendencia de Electricidad y Combustible**, comparece el Superintendente (S) don Mariano Corral González, quien asevera que el reclamo es infundado, por lo que debiera ser desestimado en todas sus partes.

En cuanto a los hechos, destaca que la propia empresa reconoció los hechos que fundan la sanción y, que una vez analizados sus descargos, determinó que correspondía desestimar sus alegaciones.

Indica que las resoluciones tienen su fundamento en las funciones que le encomienda su normativa orgánica y, señala que las normas aplicables son la Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento. Adicionalmente, el artículo 130 de la LGSE se remite a reglamentos para determinar los estándares normales con límites máximos de variación y, el artículo 323 letra e) del Reglamento establece como objeto de sanción, el incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y otras normas técnicas. Es decir, esa norma parte del supuesto que los estándares o exigencias de calidad pueden estar en la respectiva norma técnica, como es lógico, por ser una materia eminentemente técnica y en permanente evolución.

Igualmente, es aplicable el artículo 72-19 de la LGSE, que dispone que la Comisión Nacional de Energía deberá fijar, mediante resolución exenta las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico.

Esa norma, agrega, fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 706 de 2017 de la CNE, que fijó la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (NTCSD).



Respecto a los argumentos del reclamo, sobre la supuesta determinación de la conducta como gravísima en forma no determinada o tipificada en norma legal, hace presente que la conducta contraviene el artículo 130 de la LGSE, el artículo 145 y 222 letra h) del Reglamento, y el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, con su fundamento en una conjugación armónica de normas de rango legal, reglamentario y técnico.

Desestima que la conducta esté calificada erradamente como gravísima o que se produzca infracción al principio *non bis in idem*. En efecto, indica, el ámbito geográfico objeto de cada una de las investigaciones está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa, afectando a los usuarios de esas comunas, y el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta. Igual consideración se debe tener para evaluar el porcentaje de usuarios afectados, en cada comuna afectada en particular. Así, la infracción, reconocida por CGE, afectó al 42,7% de los usuarios abastecidos por la empresa en las nueve comunas objeto de esta infracción.

Argumenta que de conformidad con el artículo 4-2 y el Anexo de la NTCSD sobre clasificación de redes, es nítido que los estándares aplicables rigen para cada comuna. Podría haberse abierto un procedimiento por cada comuna, pero en aplicación del principio de economía procedimental, se agruparon a nivel regional.

Respecto a las alegaciones referidas al monto de la multa y su proporcionalidad, indica que conforme al artículo 16 de la Ley SEC, al dictar el acto se fundó debidamente en los parámetros que deben ser considerados para establecer el *quantum*, considerando la idoneidad de la medida y la necesidad de la misma.

En cuanto al rango de la multa, indica que las infracciones gravísimas pueden castigarse con una multa de hasta 10.000 UTA, estando dentro de ese rango.

Finalmente, indica que de los 6 elementos que contempla el artículo 16 ya citado, al menos 5 impactan en el caso: la cuantía del daño generado a los clientes; el beneficio percibido por la empresa -que realiza una porción menor de las inversiones solicitadas por ella misma y que fueron remuneradas por los clientes-; afectó al 42,7% de los clientes de las comunas afectadas; tiene conocimiento de sus obligaciones; y, su excepcional capacidad económica, razones por las que no puede sino justificarse la cuantía.

Tercero: Que, en primer término, en cuanto al marco legal aplicable para el conocimiento de este recurso de reclamación, es dable señalar que aquél es de derecho estricto, en el que no se pueden modificar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa, sino analizar la legalidad del actuar de la



recurrida y si aquélla se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades conforme a la legislación vigente. Así lo ha razonado la Corte Suprema en causa Rol N°99506-2020 en autos caratulados “Luzlinares S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, al señalar: *“Sexto: (...) el reclamo de ilegalidad en análisis constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos fácticos que fueron determinados en sede administrativa.*

Octavo: (...) Como consecuencia de aquella restricción, en la revisión de un procedimiento administrativo sancionatorio el órgano jurisdiccional sólo podrá alterar la intensidad del castigo cuando la Administración haya omitido toda fundamentación respecto los parámetros que la ley prescribe para su determinación concreta, o cuando los motivos explicitados en el acto para tal fin no se condicen con los hechos asentados en el sumario que le dio origen.”

Cuarto: Que en cuanto a la normativa aplicable, es dable tener en consideración que el artículo 2° de la Ley N° 18.410, refiere que el objetivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que las citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.

Por su parte, el artículo 3° N° 17 de la citada ley, establece que: *“corresponderá a la Superintendencia resolver, oyendo a los afectados, los reclamos que se formulen por, entre o en contra de particulares, consumidores y propietarios de instalaciones eléctricas, de gas y de combustibles líquidos, en general, y que se refieran a cualquier cuestión derivada de los cuerpos legales o reglamentarios cuyo cumplimiento le corresponde fiscalizar. Dichos reclamos serán comunicados por la Superintendencia a los afectados, fijándoles un plazo prudencial para informar. Si dicho informe fuere suficiente para esclarecer la cuestión debatida, dictará resolución inmediata. Si el afectado no contestare en el plazo fijado o si el hecho imputado fuere estimado de gravedad, la Superintendencia deberá disponer que se practique una investigación que le permita formarse juicio completo y dictar la resolución que sea procedente. En las*



resoluciones que dicte podrá aplicar multas u otras sanciones, conforme lo autoriza esta ley”.

De acuerdo al artículo 3° N° 34 de la Ley N° 18.140, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está facultada para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización.

Por su parte, además le corresponde a la recurrida adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias que observare con relación al cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas de su competencia (artículo 3° N° 36). Así también, el Título IV de la mencionada ley, faculta a la Superintendencia para imponer a las personas o entidades sujetas a su fiscalización o supervisión, que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por esta entidad, una o más de las sanciones que allí se señalan, sin perjuicio de las establecidas específicamente en dicha ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios.

Por su parte, el artículo 130 de la LGSE se remite a reglamentos para determinar los estándares normales con límites máximos de variación y, el artículo 323 letra e) del Reglamento establece como objeto de sanción, el incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y otras normas técnicas. Es decir, esa norma parte del supuesto que los estándares o exigencias de calidad pueden estar en la respectiva norma técnica, como es lógico, por ser una materia eminentemente técnica y en permanente evolución.

El artículo 130, inciso 1° de la Ley General de Servicios Eléctricos expresa: *“La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”.* El artículo 323, letra e), del Reglamento Eléctrico, señala que será objeto de sanción: *“El incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro, establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, para las actividades de generación, transmisión y distribución”.* Por otra parte, el mismo cuerpo normativo, en su artículo 145, prescribe que *“Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias.”* Añade su artículo

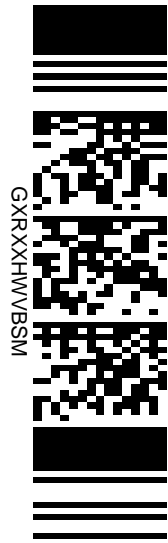


GXRXXHWVBSM

221 que los concesionarios de servicio público de distribución son responsables del cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la ley y este reglamento. El precepto añade que todo aquel que proporcione suministro eléctrico, tanto en generación, transporte o distribución, sea concesionario o no, será responsable del cumplimiento de los estándares de calidad de suministro que establecen este reglamento y las normas técnicas pertinentes. El artículo 222 del mismo texto normativo define la calidad de servicio como el conjunto de propiedades y estándares normales que, conforme a la ley y el reglamento, son inherentes a la actividad de distribución de electricidad concesionada, y constituyen las condiciones bajo las cuales dicha actividad debe desarrollarse. Según la letra h) del precepto, la calidad de servicio incluye, entre otros, la continuidad del servicio.

La Ley General de Servicios Eléctricos en el artículo 72-19, prescribe que la Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá fijar, mediante resolución exenta, las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico. La norma técnica aludida fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 706, de 2017 por la CNE que fijó la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (NTCSD). Luego, dicha NTCSD estableció indicadores de Calidad de Suministro Globales e Individuales con un enfoque puesto en las personas, es decir, se evalúa en un periodo de control de doce meses (ventana móvil), el desempeño, global de los pares “comuna -empresa” en cuanto al tiempo promedio de la duración de las interrupciones y la frecuencia promedio de ocurrencia de tales interrupciones a través de los indicadores SAIDI y SAIFI, respectivamente. Así también del tiempo total de interrupción de suministro y cantidad total de interrupciones en cada cliente, a través de los indicadores TIC y FIC, respectivamente. El artículo 4-2 de la NTCSD establece, lo siguiente: De acuerdo a la Clasificación de Redes establecida en el Anexo de la presente NTCSD, los indicadores SAIDI y SAIFI no deberán superar los límites siguientes durante cualquier periodo de doce meses consecutivos, reconociendo situaciones complejas que pueden producirse en los sistemas de distribución que impidan entregar un servicio de forma normal y fija exigencias en cada caso, para lo cual clasifica en: Estado Normal, Estado Anormal y Estado Anormal Agravado.

Igualmente, es aplicable el artículo 72-19 de la LGSE, que dispone que la Comisión Nacional de Energía deberá fijar, mediante resolución exenta las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico, la que fue



aprobada mediante Resolución Exenta N° 706 de 2017 de la CNE, que fijó la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (NTCSD).

Quinto: Que al respecto es dable señalar que en sede administrativa la propia empresa reconoció los hechos que fundan la sanción y, que una vez analizados sus descargos, determinó que correspondía desestimar sus alegaciones.

Sexto: En este orden de ideas, la conducta tenida por cierta en sede administrativa contraviene el artículo 130 de la LGSE, el artículo 145 y 222 letra h) del Reglamento y el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, con su fundamento en una conjugación armónica de normas de rango legal, reglamentario y técnico.

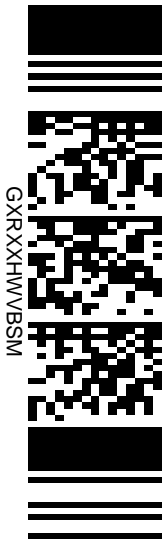
Séptimo: Asimismo, corresponde desestimar la alegación que la conducta esté calificada erradamente como gravísima o que se produzca infracción al principio *non bis in ídem*, por cuanto el ámbito geográfico objeto de cada una de las investigaciones está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa, afectando a los usuarios de esas comunas, y el exceso constatado en cada sector, lo que configura una infracción distinta por cada uno de los supuestos fácticos verificados. Igual derrotero se debe tener para evaluar el porcentaje de usuarios afectados, en cada comuna afectada en particular.

Así, la infracción, reconocida por CGE, afectó al 42,7% de los usuarios abastecidos por la empresa en las nueve comunas objeto de esta infracción.

Octavo: Por su parte, de conformidad con el artículo 4-2 y el Anexo de la NTCSD sobre clasificación de redes los estándares aplicables rigen para cada comuna. De esta forma, pudo haberse abierto un procedimiento por cada comuna, pero en aplicación del principio de economía procedimental, se agruparon a nivel regional.

Noveno: Asimismo, la resolución reclamada ha dado estricta observancia a los principios de proporcionalidad -congruencia que debe existir entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo impuesto y motivación-, considerando la participación de la recurrente en los hechos y los efectos que su incumplimiento generó.

En consecuencia, respecto a las alegaciones referidas al monto de la multa y su proporcionalidad, conforme al artículo 16 de la Ley SEC, la autoridad recurrida al dictar el acto se fundó debidamente en los parámetros que deben ser considerados para establecer el *quantum*, considerando la idoneidad de la medida y la necesidad de la misma.



En efecto, en cuanto al rango de la multa, las infracciones gravísimas -artículo 15, numeral 4° de la Ley N° 18.410- pueden castigarse con una multa de hasta 10.000 UTA, encontrándose dentro de ese rango, de acuerdo a la cuantía del daño generado a los clientes; el beneficio percibido por la empresa -que realiza una porción menor de las inversiones solicitadas por ella misma y que fueron remuneradas por los clientes-; la afectación al 42,7% de los clientes de las comunas afectadas; que tiene conocimiento de sus obligaciones; y, su excepcional capacidad económica.

Décimo: En efecto, se ha constatado que en la determinación del monto de la multa se han respetado todos los rangos legales en materia de imposición de sanciones y se han considerado todas las circunstancias establecidas en el artículo 16° de la Ley N° 18.410, cumpliendo al efecto los requisitos de fundamentación y motivación que impone el ordenamiento jurídico a los actos de los órganos de la administración del Estado, considerándose la magnitud de la infracción y la responsabilidad de la reclamante en ella y la necesidad de generar los incentivos adecuados para evitar la reiteración de eventos como los descritos en el futuro, existiendo total congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo impuesto.

Undécimo: De acuerdo a lo expuesto precedentemente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles supeditó su actuar conforme a la regulación pertinente en la materia, por cuanto el acto reclamado no adolece de vicio de legalidad alguno, ya que se ha sancionado a la reclamante por el incumplimiento de la normativa vigente, habiéndose acreditado la comisión de la infracción y la responsabilidad de ENEL en la misma.

Duodécimo: Que la Corte Suprema con fecha 31 de julio de 2023, en causa Rol N° 170302-2022 resolvió:

“Décimo: Conforme a lo expuesto, es posible colegir que el SAIDI es un estándar, que establece un parámetro de tiempo dentro del que es permitido a la empresa interrumpir el servicio y afectar al usuario. En otras palabras, fija un lapso dentro del cual es tolerable para el usuario soportar una interrupción dentro de un año calendario. Así entonces, no se mide la concurrencia de una interrupción, sino de un cumulo de eventos que dentro de doce meses, habrían afectado a los usuarios con la interrupción del suministro y que importa superar los límites establecidos por la norma para dichos efectos. Undécimo: Por otra parte, de la lectura de la NTCSD y sus anexos, es posible colegir que los estándares se miden “par comuna-empresa” e incluso determina una clasificación que denomina “redes por provincia”, es decir, la norma no refiere a una medición de los estándares de forma y/o a nivel nacional general o respecto de todos los clientes regulados de



una empresa de distribución y ello es evidente que así sea, atendido la diferencia que cada zona del país puede presentar y que, por tanto, impondrá al concesionario prioridades y/o obligaciones particulares distintas para ejecutar su servicio según las necesidades de la comuna en que tenga su concesión. Por otro lado, aceptar la tesis de la empresa, importaría que en la mayoría de las interrupciones en zonas aisladas o de pocos habitantes, -muchas veces las más necesitadas de este recurso, debido a su alejamiento de zonas urbanas-, podrían ser considerados usuarios discriminados negativamente por el ordenamiento sectorial, respecto a los cuales la concesionaria en esas condiciones casi nunca sería sancionada atendido el volumen de usuarios afectados en relación a su cobertura nacional, a pesar que todos ellos –al igual que en comuna más pobladas- pagan por las tarifas que cobra la empresa por sus servicios y tienen derecho a que el suministro les sea proporcionado en forma ininterrumpida. En ese entendido, se encuentra correctamente aplicado el artículo el artículo 15 N° 4 inciso tercero de la Ley N° 18.410 que prescribe, en lo pertinente, que son gravísimas las infracciones que afecten a más del 5% de los usuarios abastecidos por la distribuidora en la zona afectada. Unido al hecho, que la SEC para determinar en concreto la sanción, explicitó cada uno de los factores que contempla el artículo 16 de la Ley N° 18.410.

Duodécimo: Asentado el radio que comprende el índice SAIDI, se colige la improcedencia in limine del argumento entregado por CGE, en cuanto fija un evento de caso fortuito o fuerza mayor, como el causante de la superación de los estándares del SAIDI, porque conforme se desprende de la lectura del artículo 4-2 de la NTCSD, ratificado por la SEC en estrados, aquel comprende la revisión de un período, en que la autoridad analiza y pondera las interrupciones internas que, dentro de un estado normal, la empresa informa, luego de desestimar la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que la empresa postula para dichos efectos, como también las fallas externas y, que solo una vez, despejado lo anterior, coteja con la tabla de límites del SAIDI, para determinar si esas interrupciones culpables de la reclamante sobrepasaron dichos límites. Así entonces, conforme al mérito del proceso y, sin perjuicio que los hechos que la reclamante alegó como caso fortuito o fuerza mayor, fueron desestimados por la SEC, en su oportunidad, mediante el procedimiento especial de calificación de dichos eventos y respecto de los cuales, además, la Autoridad explicitó en forma particular, en cada caso, las razones por las que los eventos propuestos, no podían ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor, por carecer aquellos de los elementos externalidad e imprevisibilidad, es dable señalar que un solo evento no es suficiente para justificar el traspaso del límite SAIDI atendido la



forma en que este es medido, haciendo improcedente in limine la referida alegación de la reclamante.

Décimo tercero: Por último, respecto del quebrantamiento del non bis in ídem, se comparte lo expuesto por las sentencias en alzada, en cuanto a que no se configura en la especie dicha ilegalidad porque, si bien, se trata de la misma infracción y sujeto pasivo, los hechos que sirven de sustrato factico para estructurarla como los usuarios afectados son distintos y, por eso explica, también, que los eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor que la CGE postuló para ser considerados como tales, también, son diferentes en cada caso.

Décimo cuarto: En cuanto a la apelación de la SEC, es importante consignar, en primer lugar, que el artículo 19 de la Ley N° 18.410, contempla el reclamo de ilegalidad en análisis, el cual constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la SEC (SCS N°S 186-2019, 29.934-2019, 99.508-2020 y 131.956-2020, entre otros)

Décimo quinto: Al respecto, cabe señalar que las sentencias en alzada, descartaron que la SEC incurriera en algún tipo de ilegalidad, razón por la que, en dichas condiciones, hacía improcedente rebajar la multa, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia, tal como se declaró precedentemente, se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. Ergo, si los sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa, siendo improcedente fundarse en razones de justicia y equidad para aquello (SCS Rol N° 47.898-2016, 186-2019 y 21.829-2021).

Décimo sexto: Que, por lo demás, el argumento en que se funda la Corte de Apelaciones, que eventualmente permitiría determinar una desproporcionalidad, es en sí mismo contradictorio, toda vez que, expresa: “lo cierto es que conforme a un análisis pormenorizado de los antecedentes se estima que el quantum de la multa impuesta por un monto de [...], resulta excesiva, por lo que, aplicando el principio de proporcionalidad, se reducirá a[...]”, sin explicitar como concurre la ilegalidad en este aspecto y, lo más importante, nada señala sobre cómo y bajo qué supuestos legales rebajaría las multas a los montos que luego indicó, es decir, como se configura la desproporcionalidad a la que alude”.

Décimo tercero: Que, no habiéndose verificado ilegalidad en el actuar de la recurrida, no existe fundamento para variar el monto de la multa, el que se encuentra dentro de los márgenes de la sanción dispuesta por el legislador,



aunado que, dada la naturaleza del presente arbitrio, a esta Corte sólo le corresponde precisar si concurre la infracción propuesta por el reclamante, mas no efectuar consideraciones de mérito respecto de los extremos de la sanción aplicada por la autoridad administrativa.

Décimo cuarto: En síntesis, de las disposiciones reglamentarias antes transcritas, se puede advertir, en consecuencia, que, acreditado el incumplimiento de la normativa antes transcrita, el obrar de la Superintendencia, se ha ajustado a derecho, en razón a que ha procedido dentro del ámbito de sus atribuciones, no avizorándose ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, razón por la que la reclamación formulada será desestimada.

Por estas consideraciones y de acuerdo a la Ley N° 18.410 y el Decreto Supremo N° 327 de 1997 del Ministerio de Minería -Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos-, **se rechaza** el recurso de reclamación interpuesto por don Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto de la Resolución Exenta N° 11.964 de veintiséis de abril de dos mil veintidós y la Resolución Exenta N° 35.438 de veintinueve de agosto de agosto de dos mil veintidós.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Contencioso Administrativo-486-2022.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Veronica Cecilia Sabaj E., Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. y Abogado Integrante Jorge Gomez O. Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

